



CSJ 795/2019/CS1
CSJ 703/2019/RH1
Telmex Argentina S.A. c/ GCBA s/ acción
meramente declarativa (art. 227 CCAyT) s/
recurso de apelación ordinario y de
inconstitucionalidad concedidos.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 8 de Julio de 2021

Vistos los autos: "Telmex Argentina S.A. c/ GCBA s/ acción meramente declarativa (art. 227 CCAyT) s/ recurso de apelación ordinario y de inconstitucionalidad concedidos".

Considerando:

Que las cuestiones planteadas encuentran respuesta en la doctrina establecida por este Tribunal en las causas "NSS" (Fallos: 337:858) y CSJ 1937/2014/RH1 "GCBA y otro s/ ejecución fiscal", sentencia del 4 de octubre de 2016.

En particular en cuanto a que "... si bien la... resolución... no expresa que la empresa sea prestadora de un 'servicio público de telecomunicaciones', ello no puede conducir a ocultar la verdadera naturaleza pública de la actividad de Telmex, ni a desconocer el ámbito de protección que la ley federal le otorga a tal actividad y que este Tribunal ha reconocido en numerosos precedentes..." (confr. considerando 4° de fallo dictado en la causa CSJ 1937/2014/RH1). Y, además, ya que "...mal podría considerarse que el legislador ha circunscripto la dispensa únicamente al servicio público de telecomunicaciones conocido al momento de promulgación de la norma, en el mes de agosto de 1972, impidiendo que ella abarcase también a los demás servicios que, producto de la innovación tecnológica en la materia, pudieran inventarse. Por el contrario, la intención del legislador fue la opuesta...adaptar la legislación a la realidad del país proponiendo al más fluido manejo de los sistemas de comunicaciones y a su racional utilización, ya sea en los

antiguos como en los modernos medios de que dispone la técnica, o en otros a crearse" (confr. considerando 19 de Fallos: 337:858).

Por ello, se hace lugar a la queja, se declara formalmente procedente el recurso extraordinario, y se revoca la sentencia apelada. Con costas. Agréguese la presentación directa a los autos principales. Reintégrese el depósito de fs. 71. Notifíquese y devuélvase.

DISI -//-



Corte Suprema de Justicia de la Nación

-//-DENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON HORACIO ROSATTI

Considerando:

1º) Que Telmex Argentina SA -licenciataria de distintos servicios de telecomunicaciones- promovió acción declarativa contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), con la finalidad de que se despeje el estado de incertidumbre que -a su entender- existe con relación a la legalidad de la intimación que le cursó la demandada por el cobro de \$ 3.288.403,80 (períodos fiscales 2007/2008), en concepto del "gravamen por la ocupación y/o uso de la superficie, el subsuelo y el espacio aéreo de la vía pública" (conforme arts. 293 y 298 del Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -t.o. 2008- y leyes tarifarias 2178, anexo, art. 42 y 2568, anexo, art. 41).

Básicamente la actora argumentó que la normativa local resulta inconstitucional por dos razones: i) afecta la cláusula del comercio interjurisdiccional (artículo 75 inciso 13, Constitución Nacional); y ii) ignora la exención reconocida en el artículo 39 de la ley federal 19.798 -para la prestación del servicio público de telecomunicaciones- sobre los gravámenes nacionales, provinciales y municipales, por el uso diferencial del dominio público (fs. 1/39, en especial fs. 14/20 vta.).

2º) Que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad revocó, por mayoría, la sentencia de la anterior instancia y rechazó la demanda (fs. 1235/1247 vta.).

Para decidir de ese modo, los magistrados brindaron los siguientes fundamentos:

i) la jueza Ruiz -con remisión a sus conclusiones en la causa "Telefónica de Argentina SA c/ GCBA s/ acción meramente declarativa (art. 277 CCAyT) s/ recurso de inconstitucionalidad concedido", expediente 11.712/14, del 14 de diciembre de 2016- señaló que la parte actora, al no ser prestataria de un servicio público, no se encuentra comprendida en la exención que contempla el artículo 39 de la ley 19.798. Sostener lo contrario -dijo- implicaría asignar al beneficio en cuestión un alcance más amplio del que surge del texto expreso de la norma.

ii) el juez Lozano -a cuyo voto adhirió la jueza Weinberg- consideró que "...Telmex no ha probado que haya existido una norma expresa calificando [a los servicios que presta] como 'públicos' ('publicatio'), así como tampoco ha [acreditado] la existencia de otros elementos relevantes para juzgar que los servicios que alega han sido regulados como 'servicios públicos'..." (fs. 1240).

iii) los jueces Casás y Conde, en disidencia, hicieron mérito -por razones de economía procesal- a la jurisprudencia de esta Corte en los casos "NSS c/ GCBA" (Fallos: 337:858) y "GCBA y otro s/ ejecución fiscal" (CSJ 1937/2014/RH1, del 4 de octubre de 2016). Allí, en síntesis, se dejó establecido que "...mal podría considerarse que el legislador ha circunscripto la dispensa únicamente al servicio público de



Corte Suprema de Justicia de la Nación

telecomunicaciones conocido al momento de promulgación de la [ley 19.798], en el mes de agosto de 1972, impidiendo que ella abarcara también a los demás servicios que, producto de la innovación tecnológica en la materia, pudieran inventarse..." (Fallos: 337:858, considerando 19).

3°) Que contra esa decisión, Telmex SA dedujo recurso extraordinario federal que -tras ser contestado por el GCBA- fue concedido por cuestión federal y denegado por la causal de arbitrariedad; esto último motivó la presentación en queja de la actora ante este Tribunal (fs. 1251/1272 vta., 1275/1290 vta., fs. 1292/1293 vta. y CSJ 703/2019/RH1, fs. 65/70).

La recurrente se agravia porque considera que la máxima instancia porteña realizó una interpretación irrazonable del artículo 39 de la ley 19.798. Argumentó que, sin ningún sustento, el tribunal a quo desconoció la doctrina jurisprudencial que, sobre el particular, fijó esta Corte en los citados precedentes de Fallos: 337:858 ("NSS") y CSJ 1937/2014/RH1 ("GCBA"). Por análogas razones, calificó al fallo de arbitrario.

4°) Que el recurso extraordinario federal es formalmente admisible, puesto que se encuentra en discusión, de manera directa e inmediata, la inteligencia de cláusulas constitucionales (arts. 1°, 5°, 31, 75 incisos 13, 18 y 30, 129 y cctes.) y del artículo 39 de la ley 19.798, de indiscutible naturaleza federal. Además, la decisión final del superior

tribunal de la causa ha sido contraria al derecho que la recurrente funda en ellas (art. 14, inciso 3°, ley 48). El agravio relativo a la arbitrariedad de la sentencia se debe examinar conjuntamente con la cuestión federal, a la que se encuentra indisolublemente ligado.

Finalmente, corresponde recordar que cuando se encuentra en debate la interpretación de una norma de derecho federal, la Corte Suprema no está limitada en su decisión por los argumentos de las partes o de la anterior instancia, sino que le incumbe realizar una declaratoria sobre el punto disputado (arg. doct. en autos "Ravetti" (Fallos: 343:116), entre muchos otros).

5°) Que el tema que se trae a conocimiento y decisión de esta Corte radica en determinar -sobre la base de nuestra arquitectura constitucional- el alcance que cabe asignar al artículo 39 de la ley 19.798 en cuanto reconoce, a los fines de la prestación del servicio público de telecomunicaciones, una exención respecto a los gravámenes provinciales y municipales por el uso diferencial de su dominio público.

6°) Que para establecer en qué escenario la dispensa reconocida por el legislador federal respecto a los tributos locales resulta una respuesta admisible, se debe partir de la distribución de competencias que realiza la Constitución Nacional. Y, a tal fin, resulta imprescindible tener en cuenta las siguientes premisas:



Corte Suprema de Justicia de la Nación

i) el armónico desenvolvimiento del sistema federal de gobierno depende de la "buena fe", de la "coordinación" y de la "concertación" entre los distintos estamentos de gobierno, pues esos principios constituyen el modo razonable para conjugar los diferentes intereses en juego y encauzarlos hacia la satisfacción del bien común. Por ello, según el principio de "lealtad federal" o "buena fe federal" se debe evitar que los Estados "abusen en el ejercicio de [sus] competencias, tanto si son propias como si son compartidas o concurrentes" (Fallos: 340:1695; Fallos: 342:1061, disidencia conjunta de los jueces Maqueda y Rosatti, considerando 9°).

ii) las leyes deben interpretarse inexcusablemente a partir de una inteligencia que -sin obviar los márgenes de actuación que cabe a cada instancia gubernamental- preserve el armónico y pleno ejercicio de la totalidad de las atribuciones constitucionales, sin acrecentar los poderes del gobierno central en desmedro de las facultades provinciales y viceversa.

7°) Que, sobre la base de tales pautas, la Constitución Nacional utiliza para la asignación de competencias entre el Estado Nacional y los Estados locales el criterio de regla y excepción: la "regla" es la competencia provincial o local, la "excepción" es la competencia federal, de tal modo que todo aquello que no está expresamente cedido por las provincias al gobierno federal, queda retenido en aquellas (artículo 121 de la Constitución Nacional).

Sin perjuicio de lo anterior, dado el modelo de Estado federal que ha adoptado la Constitución Nacional, la competencia para regular un mismo instituto puede ser atribuida a diferentes niveles de forma excluyente -arts. 75 inc. 12 y 123, entre otros-, concurrente -art. 75, inc. 18 y 125- o cooperativa -art. 41 en materia ambiental, artículo 75 inc. 2 en materia de coparticipación o art. 75 inc. 12 en materia de legislación de fondo y procesal, entre otros ejemplos- (Fallos: 342:1903 disidencia del juez Rosatti, considerando 5° y Fallos: 342:1061, disidencia conjunta de los jueces Maqueda y Rosatti, considerando 7°).

8°) Que corresponde ahora examinar los ámbitos de regulación concretos a los que refiere esta causa: por un lado, la competencia para reglamentar las telecomunicaciones y, por el otro, las atribuciones tributarias que la Constitución le reconoce a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

i) sobre el primer aspecto, esta Corte ha sostenido que el servicio de telecomunicaciones interprovincial se encuentra comprendido en el vocablo "comercio" utilizado por nuestra Constitución Nacional, pues el mismo abarca, además del tráfico mercantil y la circulación de efectos visibles y tangibles para todo el territorio de la Nación, la transmisión por teléfono u otro medio de ideas, órdenes, convenios, etcétera. De este modo, se ha justificado la jurisdicción federal en el artículo 75, incisos 13, 14 y 18 de la



Corte Suprema de Justicia de la Nación

Constitución Nacional (arg. doct. Fallos: 257:159, 320:162, 333:296 y 342:1061, disidencia conjunta de los jueces Maqueda y Rosatti, considerando 14).

ii) con relación a la segunda cuestión, cabe afirmar que las provincias cuentan con la potestad de darse leyes tributarias en los términos del artículo 75 incisos 1º, 2º y concordantes de la Constitución Nacional y, en general, dictar las normas que juzguen conducentes a su bienestar y prosperidad, sin más limitaciones que las enumeradas en el artículo art. 126 de la Ley Fundamental. La creación de impuestos, elección de objetos imponibles y formalidades de percepción es de su propio resorte y entre los caracteres que hacen a su autonomía es primordial el de imponer contribuciones y percibir las sin intervención de autoridad extraña. Estos principios resultan plenamente aplicables a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de las competencias asumidas como consecuencia del reconocimiento del rango de 'ciudad constitucional federada' proveniente de la reforma de la ley fundamental de 1994 (artículo 129, Constitución Nacional; "Transnea", CAF 1665/2008/1/RH1, del 12 de marzo de 2019, disidencia del juez Rosatti).

9º) Que la interrelación entre estas atribuciones - interpretadas de buena fe- no debe plantear ningún tipo de conflicto normativo; el propio texto constitucional se encarga de brindar la respuesta para lograr que las competencias de cada esfera de gobierno se desarrollen con plenitud en la vida

institucional de la Federación, sin anularse ni excluirse. Al ser ello así, los actos de las legislaturas provinciales no pueden ser invalidados sino en los casos en que la Constitución concede al Congreso Nacional, en términos explícitos, un poder exclusivo, o en los supuestos en los que el ejercicio de idénticos poderes ha sido expresamente prohibido a las provincias, o cuando existe una absoluta y directa incompatibilidad en el ejercicio de ellos por estas últimas ("Transnea", cit., disidencia del juez Rosatti).

Tan indiscutible, pues, es la competencia federal para regular las telecomunicaciones, como la provincial para estatuir su sistema tributario. Y la convivencia armónica entre ellas encuentra su punto de equilibrio en la propia labor de los constituyentes de 1994 que, en el art. 75, inc. 30, reconocieron expresamente que "las autoridades provinciales y municipales conservarán los poderes de policía e imposición sobre los establecimientos de utilidad nacional en tanto no interfieran el cumplimiento de aquellos fines", esto es, con los fines específicos de utilidad nacional.

10) Que con relación a la validez de la exención tributaria otorgada por el Congreso de la Nación sobre tributos locales, este Tribunal ha sostenido que una consecuencia inevitable del poder de gravar es la potestad de desgravar, o sea de eximir de la carga tributaria. En efecto, la distribución federal de competencias para crear hechos imponibles lleva consigo inescindiblemente el poder de eximir el pago de los



Corte Suprema de Justicia de la Nación

tributos consecuentes, y si la Constitución señala, por ejemplo, un ámbito dentro del cual los Estados miembros pueden ejercitar facultades impositivas propias, reconocidas por normas formuladas en ejercicio del poder constituyente, es claro que otras normas, emanadas de la Federación y formalizadas en leyes ordinarias, no podrán válidamente conceder exenciones de los impuestos que los Estados miembros hayan establecido, salvo que así lo autorice la Constitución (cf. "Transnea", cit., disidencia del juez Rosatti).

11) Que dado ese principio general, cobra relevancia el criterio de interpretación restrictivo de los privilegios otorgados por normas federales sobre tributos locales. La exención, como principio, no ha de entenderse como indiscriminada y absoluta, sino excepcional (arg. doct. Fallos 248:736, 249:292, entre otros) y debe ser juzgada atendiendo a la naturaleza de la actividad desarrollada por la institución que la invoca y a la índole del tributo exigido, so pena de coartar de otro modo las facultades impositivas de las provincias o de la Ciudad de Buenos Aires, que éstas deben ejercer en su ámbito propio, en tanto no hayan sido conferidas al Gobierno Federal (cf. "Transnea", cit., disidencia del juez Rosatti).

12) Que sobre la base de los principios y reglas constitucionales enunciados, cabe dilucidar el alcance del artículo 39 de la ley 19.798 que -recordemos- estipula a los fines de la prestación del servicio público de

telecomunicaciones una exención a todo gravamen (incluidos los locales, que es lo que aquí interesa) con relación al uso diferencial del suelo, subsuelo y espacio aéreo del dominio público nacional, provincial o municipal.

Dicha exención sobre gravámenes locales -consagrada en el año 1972- para ser conteste con la Constitución Nacional, en especial con la claridad de su texto a partir de la reforma de 1994, debe interpretarse en forma restrictiva, y no cabe asignarle otro sentido que el de fijar un límite al poder impositivo local en la medida en que, por su intermedio, se frustre el fin de utilidad nacional perseguido por la legislación federal (arts. 31, 75 incs. 2°, 13, 14 y 30, 121, 122, 123, 126 y 129 de la Constitución Nacional).

Y, en este sentido, a los fines de determinar la interferencia o incompatibilidad de la regulación local con la federal esta Corte ha establecido, como principio, que no constituyen por si mismos obstáculos reales y efectivos para el logro de los fines de utilidad nacional, susceptible de invalidar la norma local: i) la mera incidencia económica, ponderada en forma aislada, que acarrearán las normas locales sobre las actividades o establecimientos sujetos a jurisdicción federal; ii) las regulaciones que resulten periféricas y extrínsecas al núcleo o la sustancia de la regulación federal en cuestión; y iii) las disposiciones que no impliquen una degradación de la actividad de jurisdicción nacional (Fallos:



Corte Suprema de Justicia de la Nación

342:1061, disidencia de los jueces Maqueda y Rosatti, considerando 23).

13) Que, en definitiva, la competencia federal en telecomunicaciones no excluye ni se opone a la local en materia fiscal; ambas tienen idéntica jerarquía y los constituyentes han sido cuidadosos al precisar el campo de acción de cada una de ellas dentro de la dinámica federal, exigiendo -de modo inequívoco- su compatibilidad (arts. 1º, 5º, 75 incisos 13, 14, 18 y 30, 121 y cctes., Constitución Nacional).

En tales términos, la actora lejos de justificar y acreditar cuál sería eventualmente la interferencia o incompatibilidad del tributo local con el fin de utilidad nacional, se limitó a sostener -asumiendo como un dogma- que el artículo 39 de la ley 19.798 la libera del gravamen local sin ningún tipo de condicionamiento (v. fs. 14/20 y fs. 830 vta./832). Admitir una lectura con esos alcances supone convalidar que la mera incidencia económica alcanza para demostrar una frustración al interés nacional en los términos aquí definidos; derivando tal proposición en un inadmisibles quebrantamiento del diseño constitucional (arts. 31, 75 inc. 30, y cctes., de la Constitución Nacional).

Al respecto, cabe recordar -como lo expresó desde antiguo este Tribunal- que la Constitución ha querido hacer un solo país para un solo pueblo. No habría Nación si cada provincia se condujera como una potencia independiente; pero

tampoco la habría si fuese la Nación quien socavara las competencias locales (arg. doct. Fallos: 178:9, 340:1695). De esta manera, el ideario federal en el que descansa nuestro sistema de gobierno parte de la base de que el Estado Nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios coordinan sus facultades "para ayudarse y nunca para destruirse" (Fallos: 342:509 y Fallos: 342:1061 disidencia conjunta de los jueces Maqueda y Rosatti, considerando 9°).

Estas definiciones -que delimitan el correcto margen de actuación de los distintos órdenes de gobierno- son suficientes para descartar los términos con que fue propuesta la apelación federal, sin que resulte necesario indagar los distintos tipos de servicios de telecomunicaciones que comprendería la citada franquicia.

Por ello, se hace lugar a la queja y se declara formalmente procedente el recurso extraordinario y, por las razones aquí desarrolladas, se confirma la sentencia apelada. Costas por su orden en atención a que la actora se pudo considerar con derecho a litigar (art. 68, párrafo 2° CPCCN). Devuélvase el depósito de fs. 70/71 del cuaderno de queja y agregase este último al principal. Notifíquese y devuélvase.

Firmado Digitalmente por HIGHTON Elena Ines

Firmado Digitalmente por MAQUEDA Juan Carlos

Firmado Digitalmente por LORENZETTI Ricardo Luis

Firmado Digitalmente por ROSATTI Horacio Daniel



CSJ 795/2019/CS1
CSJ 703/2019/RH1
Telmex Argentina S.A. c/ GCBA s/ acción
meramente declarativa (art. 227 CCAyT) s/
recurso de apelación ordinario y de
inconstitucionalidad concedidos.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Recurso de queja interpuesto por **Telmex Argentina S.A.**, representada por el **Dr. Guillermo A. Lalanne**.

Recurso extraordinario interpuesto por **Telmex Argentina S.A.**, representada por el **Dr. Guillermo A. Lalanne**.

Traslado contestado por el **Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires**, representado por la **Dra. Luciana Costantini**, con el patrocinio letrado de la **Dra. Adriana Patricia Boskovich**.

Tribunal de origen: Tribunal **Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires**.

Tribunal que intervino con anterioridad: **Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario n° 17 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires**.



Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 8 de Julio de 2021

Vistos los autos: "GCBA c/ BT Latam Argentina SA s/ ejecución fiscal", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

Que las cuestiones planteadas han sido correctamente tratadas en el dictamen de la señora Procuradora Fiscal, cuyos fundamentos son compartidos por el Tribunal y a los que cabe remitir en razón de brevedad, con exclusión de la cita de Fallos: 238:1893.

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada. Con costas. Agréguese la presentación directa a los autos principales y reintégrese el depósito de fs. 66 por no corresponder (artículo 13, inciso f, de la ley 23.898). Notifíquese y devuélvanse los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expresado en la presente.

DISI-//-

-//-DENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON HORACIO ROSATTI

Considerando:

Que las cuestiones planteadas resultan sustancialmente análogas a la consideradas y resueltas por esta Corte en las causas CSJ 795/2019/CS1 y CSJ 703/2019/RH1 "Telmex Argentina S.A. c/ GCBA s/ acción meramente declarativa (art. 227 CCaYT s/ recurso de apelación ordinario y de inconstitucionalidad concedidos", disidencia del juez Rosatti, sentencia del día de la fecha, a cuyos argumentos corresponde remitirse, en lo pertinente, en homenaje a la brevedad.

Por ello, oída la señora Procuradora Fiscal, se hace lugar a la queja, se declara formalmente procedente el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada. Costas por su orden en atención a que la ejecutada se pudo considerar con derecho a litigar (artículo 68, párrafo 2º, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Devuélvase el depósito de fs. 66 del recurso de queja y agrégase este último al principal. Notifíquese y devuélvase.

Firmado Digitalmente por ROSENKRANTZ Carlos Fernando

Firmado Digitalmente por HIGHTON Elena Ines

Firmado Digitalmente por MAQUEDA Juan Carlos

Firmado Digitalmente por LORENZETTI Ricardo Luis

Firmado Digitalmente por ROSATTI Horacio Daniel



CSJ 1573/2018/CS1
CSJ 1551/2018/RH1
GCBA c/ BT Latam Argentina SA s/ ejecución
fiscal.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Recurso extraordinario interpuesto por **BT Latam Argentina S.A.** representada por el **Dr. Emilio Beccar Varela**, con el patrocinio letrado del **Dr. Santiago L. Montezanti**.

Traslado contestado por el **Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires**, representado por la **Dra. Cecilia Laura Valera**, con el patrocinio letrado de la **Dra. Elena Fabiana Befaro**.

Recurso de queja interpuesto por **BT Latam Argentina S.A.** representada por el **Dr. Emilio Beccar Varela**, con el patrocinio letrado del **Dr. Santiago L. Montezanti**.

Tribunal de origen: **Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires**.

Tribunales que intervinieron con anterioridad: **Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA n° 16 y Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA**.

Procuración General de la Nación

S u p r e m a C o r t e :

- I -

A fs. 27/31 de los autos principales, el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires revocó la decisión de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario que, al confirmar la sentencia de primera instancia, había hecho lugar a la excepción de inhabilidad de título opuesta y rechazado la ejecución fiscal promovida por la actora en concepto de "contribución por ocupación del subsuelo de la vía pública" (art. 342 del Código Fiscal) por los períodos 2009 a 2013.

Para así resolver, y en lo que ahora interesa, los Dres. Lozano y Weinberg indicaron: "...la Cámara se limitó a expresar que estaba acreditado que BT Latam S.A. prestaba un servicio, sin verificar si era o no público; ni en la hipótesis de que prestare uno público, si no prestaba otros que ocuparan un espacio mayor o distinto del que usaba para prestar el servicio público" (cfr. fs. 29, primer párrafo).

Añadieron: "Estas verificaciones requieren un examen de los hechos que excede el llevado a cabo en autos. Consecuentemente, no pudo el a quo tener por exenta la actividad desplegada" (cfr. fs. 29, segundo párrafo).

Por su parte, la Dra. Ruiz se remitió a su voto en la sentencia del 14 de diciembre de 2016 recaída en el expediente 11.712, "Telefónica de Argentina S.A. c/GCBA s/acción meramente declarativa (art. 277 CCAT) s/recurso de inconstitucionalidad concedido", cuya copia se agregó a la decisión ahora recurrida.

En dicho pronunciamiento, la magistrada manifestó que no coincidía con la hermenéutica plasmada por V.E. en la causa "NSS" (Fallos: 337:858), entre otras, pues incluir en el ámbito de aplicación del art. 39 de la ley 19.798 a otras actividades que no constituyen servicios públicos de telecomunicaciones resulta lesivo del principio de legalidad.

Manifestó que el hecho de que se use el mismo espacio físico para la prestación del servicio público de telecomunicaciones y para desarrollar otras actividades no permite ampliar el ámbito de aplicación de la dispensa prevista en el art. 39 de la ley 19.798.

Afirmó que las exenciones tributarias son de interpretación restrictiva y que el beneficio previsto en el art. 39 de la ley 19.798 abarca al uso del suelo, subsuelo y espacio aéreo del dominio público únicamente en la medida en que tal utilización sea a los fines de la prestación del servicio público de telecomunicaciones y no respecto de cualquier actividad que lleve a cabo una empresa que cuente con una licencia para prestar aquél.

- II -

Disconforme, la demandada interpuso el recurso extraordinario de fs. 42/59, concedido en cuanto se debate la interpretación de normas de carácter federal y rechazado en lo atinente a la arbitrariedad que endilga tal pronunciamiento. Contra esa denegatoria, se presentó la queja que tramita bajo el número de expediente CSJ 1551/2018/RH1.

Explicó que BT Latam Argentina S.A. es la continuadora legal de COMSAT, compañía internacional líder en el

Procuración General de la Nación

área de de las telecomunicaciones y que en nuestro país presta servicios públicos de telefonía y transferencia de datos principalmente a empresas y administraciones públicas.

Manifestó que ello ha sido reconocido por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario, quien estudió la naturaleza de la actividad desarrollada por BT Latam Argentina S.A. no sólo con fundamento en la ley 19.798 sino también a la luz de lo dispuesto por su similar 27.078, para concluir que se trata de la prestación de un servicio público.

Tratándose de un servicio público, dijo, resulta irrelevante la proporción del subsuelo que se destine a su prestación en concurrencia o de manera concomitante con otros que no revistan ese carácter.

Asimismo, planteó que no existe una mayoría válida en el pronunciamiento, pues mientras los Dres. Lozano y Weinberg sostienen que no se encuentra probada la naturaleza pública del servicio prestado por BT Latam Argentina S.A., la Dra. Ruiz se limita a manifestar su discrepancia con el criterio sentado en Fallos: 337:858 pero sin negar la naturaleza pública de ese servicio. Por su parte, agrega, los Dres. Conde y Casás admiten la naturaleza pública del servicio prestado y aplican la doctrina de Fallos: 337:858, lo cual -en su criterio- evidencia que los votos resultan contradictorios entre sí y que la sentencia carece de la necesaria lógica interna para ser considerada un acto jurisdiccional.

- III -

Liminarmente, no es ocioso recordar que si bien en principio las sentencias en los juicios ejecutivos no reúnen el carácter de definitivas a los fines del recurso previsto en el art. 14 de la ley 48, debido a la posibilidad que asiste a las partes de plantear nuevamente el tema, ya sea por parte del Fisco librando una nueva boleta de deuda o, por el ejecutado, mediante la vía de repetición (Fallos: 308:1230; 311:1724, entre otros), en la presente causa se ha controvertido lo relativo a la procedencia de la excepción de inhabilidad de título por manifiesta inexistencia de deuda (art. 451, inc. 6°, de la ley 189) y, por la forma como ha sido resuelta por el superior tribunal de la causa, ello no podrá ser replanteado posteriormente (Fallos: 271:158; 294:363; 315:2954; 321:706, entre otros).

Sentado ello, pienso que el recurso extraordinario resulta formalmente admisible, puesto que se ha cuestionado la inteligencia otorgada por el tribunal superior de la causa a normas federales (art. 39 de la ley 19.798), y la decisión ha sido contraria al derecho que el recurrente funda en ellas (art. 14, inc. 3°, de la ley 48).

En otro sentido, habida cuenta de que los argumentos que sustentan la tacha de arbitrariedad están inescindiblemente unidos a la interpretación de las normas federales antes mencionadas, pienso que corresponde que sean tratados en forma conjunta (Fallos: 327:3560; 238:1893 y 329:1440).

Procuración General de la Nación

- IV -

Despejado lo anterior, pienso que corresponde desestimar la impugnación por vicios de forma del pronunciamiento pues, según conocida jurisprudencia del Tribunal, las cuestiones vinculadas con las formalidades de la sentencia y el modo de emitir su voto los miembros de los tribunales colegiados son de naturaleza procesal, ajenas a la apelación del art. 14 de la ley 48, sin que se adviertan entre las opiniones que integran la mayoría divergencias de entidad suficiente para apartarse de ese principio (Fallos: 298:364; 299:105; 304:1699 y 308:1922).

- V -

En cuanto al fondo de la cuestión debatida, pienso que las cuestiones aquí debatidas resultan sustancialmente análogas a las ya resueltas en Fallos: 337:858 y en la causa CSJ 1937/2014/RH1, "GCBA y otro s/ ejecución fiscal", sentencia del 4 de octubre de 2016, a cuyos términos me remito en cuanto fueren aquí aplicables.

En efecto, se encuentra fuera de debate que la ejecutada contaba, durante los períodos de este juicio, con el título o certificado pertinente para operar los servicios de telefonía local, de larga distancia nacional e internacional, entre otros (resoluciones SC 147/2003 y 1.355/99, cfr. fs. 231/234 y 145/167 del expediente agregado al principal); que ello le permitía instalar y ampliar sus medios y sistemas de telecomunicaciones; que el art. 39 de la ley 19.798 reservó - para la ubicación de dichas instalaciones y redes- un uso diferencial del suelo, subsuelo y espacio aéreo del dominio

público nacional, provincial o municipal, y estableció que el referido uso "estará exento de todo gravamen".

Si bien las citadas resoluciones no expresan que la empresa sea prestadora de un "servicio público de telecomunicaciones" ni en su texto se han empleado los términos "servicio público", ello no puede conducir a ocultar la verdadera "naturaleza pública" de la actividad de BT Latam Argentina S.A., ni a desconocer el ámbito de protección que la ley federal le otorga a tal actividad y que el Tribunal ha reconocido en numerosos precedentes (conf. Fallos: 320:162; CSJ 197/1994 (27- T)/CS1 "Telefónica de Argentina S.A. c/ Municipalidad de Santa Rosa s/ acción meramente declarativa", del 27 de febrero de 1997; CSJ 125/1997 (33-T)/CS1 "Telefónica de Argentina S.A. c/Municipalidad de General Pueyrredón s/ acción declarativa", del 21 de agosto de 1997; CSJ 124/1998 (34-T)/CS1 "Telefónica de Argentina S.A. c/ Municipalidad de la Ciudad de Mendoza s/ acción procesal administrativa", del 29 de febrero de 2000; "Telefónica de Argentina S.A. c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ repetición" -Fallos: 333:255-; "IMPSAT SA c/ GCABA -ley 19.798" -Fallos: 334:139- y "NSS S.A c/ GCBA s/ proceso de conocimiento" -Fallos: 337:858-).

En tales condiciones, estimo -con arreglo a la doctrina de esta Corte Suprema sobre arbitrariedad de las sentencias (Fallos: 301:865; 303:160 y sus citas)- que la decisión impugnada resulta descalificable como acto jurisdiccional.

Por lo demás, y a mayor abundamiento, no puede pasar inadvertido que el art. 39 de la ley 19.798 requiere de previa autorización de los respectivos titulares de la jurisdicción

Procuración General de la Nación

territorial para la ubicación de las instalaciones y redes en el suelo, subsuelo y espacio aéreo de su dominio público a los fines de la prestación del "servicio público de telecomunicaciones".

Tengo para mí que el cobro que aquí intenta la ejecutante se funda, precisamente, en el hecho de que las redes están colocadas en su dominio público, para lo cual ha debido evaluar el carácter "público" del servicio a prestar mediante dichas instalaciones al momento de conceder la pertinente autorización, carácter que ahora pretende desconocer en abierta contradicción con sus propios actos.

- VI -

En virtud de lo hasta aquí expuesto, opino que corresponde hacer lugar a la presente queja, revocar la sentencia de fs. 27/31 y ordenar que, por quien corresponda, se dicte una nueva conforme a lo aquí dictaminado.

Buenos Aires, 18 de julio de 2019.

ES COPIA

LAURA M. MONTI


ADRIANA N. MARCHISIO
Subsecretaria Administrativa
Procuración General de la Nación



CSJ 1356/2018

ORIGINARIO

Transportel Patagónica S.A. c/ Catamarca,
Provincia de s/ acción declarativa de certeza
e inconstitucionalidad.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Buenos Aires, 5 de Agosto de 2021

Autos y Vistos; Considerando:

1º) Que a fs. 85/106, Transportel Patagónica S.A. promueve acción declarativa en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación contra la Provincia de Catamarca, a fin de hacer cesar el estado de incertidumbre en el que dice encontrarse frente a la pretensión tributaria de la demandada de gravar los ingresos que la actora obtiene por la construcción y explotación de las obras integrantes del sistema nacional interconectado eléctrico (transporte), denominadas "Ampliación ET (estación transformadora) La Rioja Sur 500/132KV y obras complementarias", y en su caso, también solicita que se declare la inconstitucionalidad del impuesto sobre los ingresos brutos al sostener que esa gabela interfiere con el régimen federal de energía eléctrica.

Relata que las mencionadas obras fueron adjudicadas en el marco de la licitación pública nacional 11/2014 y que, como consecuencia de ello, celebró con el Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal un contrato de construcción, operación y mantenimiento (contrato COM).

Señala que la pretensión tributaria local plasmada en las liquidaciones 19170, del 2 de diciembre de 2015, y 9526565, del 7 de junio de 2018, viola diversas disposiciones del "Régimen Federal de la Energía", integrado por: i) la

Constitución Nacional (arts. 75 -incs. 13, 18, 19 y 30- y 126), en cuanto allí se establecen las facultades constitucionales del Congreso Federal para regular el comercio interjurisdiccional y los establecimientos de utilidad nacional, dictar normas tendientes al adelanto, progreso y bienestar del país y de las provincias; la no interferencia de las provincias con las políticas del Gobierno Federal y la inmunidad fiscal de los instrumentos de gobierno; ii) la ley federal 15.336 (modificada por la ley 24.065), cuyo artículo 12 establece una exención a favor de las obras e instalaciones de generación, transformación y transmisión de la energía eléctrica, para que no puedan ser gravados mediante tributos locales que restrinjan o dificulten su libre producción y circulación; iii) el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, por el cual la Nación y las Provincias derogaron los impuestos provinciales específicos que graven la energía eléctrica; y iv) las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones y el contrato COM, en el que se reitera la comentada exención del art. 12 y se incluye, entre los tributos que no pueden incidir en la obra, el impuesto sobre los ingresos brutos.

Asimismo, solicita que se cite al Estado Nacional (Ministerio de Energía y Minería) como tercero interesado (arts. 94 y ss. del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), por haber sido quien reguló el pliego de bases y condiciones y el contrato COM y por ser la autoridad de aplicación.



Corte Suprema de Justicia de la Nación

Finalmente, solicita el dictado de una medida cautelar de no innovar por medio de la cual se le ordene a la Provincia de Catamarca que se abstenga de: i) reclamar administrativa o judicialmente el impuesto sobre los ingresos brutos provenientes de las liquidaciones 19170 y 9526565, por los conceptos de capital, intereses y multa; ii) exigir el impuesto sobre los ingresos brutos respecto de ingresos provenientes del contrato COM que acompaña en el anexo II de la demanda; iii) incluir a la actora en todo tipo de listado de deudores morosos y, en el caso de haberla incluido, que la excluya inmediatamente; iv) denegar certificados de cumplimiento o de contratación con fundamento en los actos que se impugnan en la demanda; y v) incluir a la empresa en padrones de riesgo fiscal o similares, vinculados con la retención o percepción del impuesto, con fundamento en la pretensión tributaria impugnada.

2º) Que de conformidad con lo resuelto por esta Corte en las causas sustancialmente análogas CSJ 313/2008 (44-T)/CS1 "Transportadora Cuyana S.A. c/ San Juan, Provincia de y otro (Estado Nacional) s/ acción meramente declarativa"; CSJ 147/2008 (44-I)/CS1 "Intesar S.A. c/ Chubut, Provincia del y otros s/ acción declarativa de certeza" y CSJ 735/2017/1 "Líneas Comahue Cuyo S.A. c/ Mendoza s/ incidente de medida cautelar", pronunciamientos de fechas 9 de junio de 2009, 20 de octubre de 2009 y 4 de junio de 2020, respectivamente, la presente causa corresponde a la competencia originaria del Tribunal.

3º) Que esta Corte ha establecido que si bien por vía de principio medidas cautelares como las requeridas no proceden respecto de actos administrativos o legislativos, habida cuenta de la presunción de validez que ostentan, tal doctrina debe ceder cuando se los impugna sobre bases *prima facie* verosímiles (Fallos: 250:154; 251:336; 307:1702; 314:695).

4º) Que en el presente caso el Tribunal considera que se configuran los presupuestos necesarios para acceder en los términos que se dispondrán a continuación a la solicitud de la actora y, en el limitado marco de conocimiento propio del instituto en examen, no puede dejar de ponderar que la situación resulta *prima facie* análoga a la resuelta por esta Corte en las causas citadas precedentemente CSJ 147/2008 (44-I)/CS1 y CSJ 313/2008 (44-T)/CS1, sentencias del 18 de diciembre de 2012 y del 26 de abril de 2016, circunstancia que torna procedente apartarse del criterio restrictivo con que deben considerarse este tipo de medidas cautelares frente al ejercicio de la actividad fiscal provincial (CSJ 1553/2016 "Transportadora del Norte S.A. y otra c/ Mendoza, Provincia de s/ acción declarativa de certeza", pronunciamiento del 12 de diciembre de 2017, y sus citas en considerando 4º, entre otros).

5º) Que la citación de tercero solicitada en el punto 6 de la presentación inicial debe ser rechazada, por cuanto los argumentos expresados por la actora resultan insuficientes para encuadrar el caso en la comunidad de controversia que otorgue operatividad a la intervención pretendida (conf. causas CSJ



CSJ 1356/2018

ORIGINARIO

Transportel Patagónica S.A. c/ Catamarca,
Provincia de s/ acción declarativa de certeza
e inconstitucionalidad.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

313/2008 (44-T)/CS1 y CSJ 147/2008 (44-I)/CS1, citadas anteriormente en el primer párrafo del considerando 2º).

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se resuelve: I. Declarar que la presente causa corresponde a la competencia originaria de esta Corte prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional. II. Correr traslado de la demanda interpuesta contra la Provincia de Catamarca, la que se sustanciará por la vía del proceso ordinario, por el plazo de sesenta días (arts. 319, 322 y 338 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Para su comunicación al señor Gobernador y al señor Fiscal de Estado en los términos del art. 341 del código adjetivo, líbrese oficio al Juzgado Federal en turno de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. III. Hacer lugar a la medida cautelar pedida y, en consecuencia, ordenar a la demandada que se abstenga de reclamar a Transportel Patagónica S.A. el pago del impuesto sobre los ingresos brutos con respecto a la actividad concerniente a la construcción y explotación de las obras integrantes del sistema nacional interconectado eléctrico (transporte), denominadas "Ampliación ET (estación transformadora) La Rioja Sur 500/132KV y obras complementarias", hasta tanto se dicte sentencia definitiva en estas actuaciones. Líbrese oficio al señor Gobernador a fin de poner en su conocimiento la presente decisión. IV. Desestimar el pedido de intervención obligada como tercero del Estado Nacional. Notifíquese a la actora y

comuníquese a la Procuración General de la Nación.

DISI-//-



CSJ 1356/2018

ORIGINARIO

Transportel Patagónica S.A. c/ Catamarca,
Provincia de s/ acción declarativa de certeza
e inconstitucionalidad.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

-//-DENCIA PARCIAL DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON HORACIO ROSATTI

Considerando:

Que el infrascripto comparte los argumentos vertidos en los considerandos 1º, 2º, y 5º del voto que encabeza este pronunciamiento, a los que remite por razón de brevedad. Ello así, específicamente, en orden a la competencia originaria de esta Corte prevista en el artículo 117 (considerando 2º del voto citado), y la desestimación de la intervención obligada como tercero del Estado Nacional (considerando 5º).

6º) Que, sentado ello, corresponde analizar la procedencia de la medida cautelar de no innovar solicitada por la actora, a los fines de que se ordene a la Provincia se abstenga de: (i) reclamar administrativa o judicialmente el impuesto sobre los ingresos brutos provenientes de las liquidaciones 19170 y 9526565, por los conceptos de capital, intereses y multa; ii) exigir el impuesto sobre los ingresos brutos respecto de ingresos provenientes del contrato COM que acompaña en el anexo II de la demanda; y iii) incluir a la actora en todo tipo de listado de deudores morosos y, en el caso de haberla incluido, que la excluya inmediatamente; iv) denegar certificados de cumplimiento o de contratación con fundamento en los actos que se impugnan en la demanda; y v) incluir a la empresa en padrones de riesgo fiscal o similares, vinculados con la retención o percepción del impuesto, con fundamento en la pretensión tributaria impugnada.

7º) Que esta Corte ha establecido que medidas cautelares como las requeridas no proceden, en principio, respecto de actos administrativos o legislativos, habida cuenta de la presunción de validez que éstos ostentan. En ese sentido se ha adoptado un criterio de particular estrictez en el examen de medidas suspensivas en materia de reclamos y cobros fiscales (Fallos: 313:1420, considerando 8º, 322:2275 y disidencias parciales del juez Rosatti en las causas CSJ 4870/2015 "Chevron Argentina S.R.L. c/ Neuquén, Provincia del s/ acción declarativa", sentencia del 19 de febrero de 2019 y CSJ 735/2017/1 "Líneas Comahue Cuyo S.A. c/ Mendoza, Provincia de s/ incidente de medida cautelar", sentencia de fecha 4 de junio de 2020, considerando 7º, entre otros).

En efecto, y a mayor abundamiento, cabe recordar que, incluso en casos en los que procedió la acción declarativa solicitada, no se consideró que la sustanciación del juicio debiera impedir la percepción del impuesto pretendida, toda vez que el procedimiento reglado por el art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación no excluye necesariamente el cobro compulsivo que la demandada estaría habilitada a intentar por la vías procesales que considere pertinentes (Fallos: 310:606 y citados supra).

8º) Que en autos no resulta suficientemente acreditada la configuración de los presupuestos establecidos en los incs. 1º y 2º del art. 230 del código adjetivo para acceder a la medida solicitada, especialmente teniendo en consideración la



Corte Suprema de Justicia de la Nación

estrictez con que corresponden ser apreciados tales extremos en virtud de naturaleza de la presente y la amplitud de la tutela cautelar requerida.

En efecto, si bien la doctrina señalada en el considerando anterior puede ceder excepcionalmente cuando los actos administrativos son impugnados sobre bases *prima facie* verosímiles (Fallos: 250:154; 251:336; 307:1702; 316:2855), a la luz del criterio del suscripto en su voto en disidencia en la causa CAF 1665/2008/1/RH1 "Transnea SA c/ CASA s/ proceso de conocimiento", sentencia de fecha 12 de marzo de 2019, considerando 8º, respecto a que la regulación local no se transforma en un obstáculo real y efectivo a la actividad de jurisdicción nacional en tanto sea periférica o extrínseca respecto a la utilidad pública del establecimiento nacional y no menoscabe o impida las operaciones de jurisdicción federal, no se advierte que la requirente haya aportado elementos de convicción suficientes que permitan arribar al específico grado de conocimiento mencionado.

Asimismo, cabe recordar que la configuración del peligro en la demora exige una apreciación atenta de la realidad comprometida, con el objeto de establecer cabalmente si las secuelas que lleguen a producir los hechos que se pretende evitar pueden restar eficacia al ulterior reconocimiento del derecho en juego, originado por la sentencia dictada como acto final y extintivo del proceso (Fallos: 319:1277, considerando 6º). En este sentido se ha destacado que ese extremo debe

resultar en forma objetiva del examen sobre los distintos efectos que podría provocar la aplicación de las diversas disposiciones impugnadas, entre ellos su gravitación económica (Fallos: 318:30; 325:388).

Sobre esa base, los argumentos vertidos por la actora a fs. 104 vta. sobre la magnitud del quantum del monto requerido por el Estado Provincial y su "incapacidad de hacerle frente ante la inexistencia de ingresos que no sean los estrictamente originados en el canon que financia de manera exclusiva a la construcción de la obra encomendada" no aportan elementos que permitan concluir per se graves efectos patrimoniales que podría traer aparejada la ejecución de los reclamos en análisis (arg. Fallos: 325:2842). Tampoco se acredita que la decisión provincial le causa un gravamen que difícilmente podría revertir en el supuesto de que la sentencia final de la causa admitiese su pretensión (Fallos: 323:3853; 329:3890) lo que impide tener por verificado la existencia de un peligro en la demora que habilite el dictado de la medida cautelar solicitada.

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se resuelve: I. Declarar que la presente causa corresponde a la competencia originaria de esta Corte prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional. II. Correr traslado de la demanda interpuesta contra la Provincia de Catamarca, la que se sustanciará por la vía del proceso ordinario, por el plazo de sesenta días (arts. 338 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la



CSJ 1356/2018

ORIGINARIO

Transportel Patagónica S.A. c/ Catamarca,
Provincia de s/ acción declarativa de certeza
e inconstitucionalidad.

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Nación). Para su comunicación al señor Gobernador y al señor Fiscal de Estado, líbrese oficio al señor juez federal en turno de la ciudad de Catamarca. III. Rechazar la medida cautelar de no innovar solicitada. IV. Desestimar el pedido de intervención obligada como tercero del Estado Nacional. Notifíquese a la actora y comuníquese a la Procuración General.

Firmado Digitalmente por ROSENKRANTZ Carlos Fernando

Firmado Digitalmente por HIGHTON Elena Ines

Firmado Digitalmente por MAQUEDA Juan Carlos

Firmado Digitalmente por LORENZETTI Ricardo Luis

Firmado Digitalmente por ROSATTI Horacio Daniel

Parte actora: Transportel **Patagónica S.A.**, representada por **Alberto Esteban Verra** con el patrocinio letrado de los **Dres. Federico Alberto Mencarini y Rodrigo Lema**.

Parte demandada: **Provincia de Catamarca**, no presentada en autos.

TRANSPORTE PATAGÓNICA S.A. C/ CATAMARCA, PROVINCIA DE s/ acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad.

CSJ 1356/2018.

(JUICIOS ORIGINARIOS)

Procuración General de la Nación

S u p r e m a C o r t e :

-I-

A fs. 85/106, Transportel Patagónica S.A. inicia acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad, en los términos del artículo 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, contra la Provincia de Catamarca, a los fines de que V.E. haga cesar el estado de incertidumbre en el que dice encontrarse frente a la pretensión tributaria de la demandada de gravar con el impuesto sobre los ingresos brutos los ingresos que la actora obtiene por la construcción y explotación de las obras integrantes del sistema nacional interconectado eléctrico (transporte), denominadas "Ampliación ET (estación transformadora) La Rioja Sur 500/132KV y obras complementarias", y, en su caso, también declare la inconstitucionalidad del mencionado tributo al sostener que esa gabela interfiere con el régimen federal de energía eléctrica.

Relata que las mencionadas obras fueron adjudicadas en el marco de la licitación pública nacional 11/2014. Como consecuencia de ello, comenta que celebró con el Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal un contrato de construcción, operación y mantenimiento (en adelante, "contrato COM").

Se queja de que la pretensión tributaria local (plasmada en las liquidaciones 9526565, del 7 de junio de 2018, y 19170, del 2 de diciembre de 2015), viola diversas disposiciones del "régimen federal de la energía", integrado por:

i) la Constitución Nacional (arts. 75 -incs. 13, 18, 19 y 30- y 126), en cuanto allí se establecen las facultades constitucionales del Congreso Federal para regular el comercio

interjurisdiccional y los establecimientos de utilidad nacional, dictar normas tendientes al adelanto, progreso y bienestar del país y de las provincias; la no interferencia de las provincias con las políticas del Gobierno Federal y la inmunidad fiscal de los instrumentos de gobierno;

ii) la ley federal 15.336 (modificada por la ley 24.065), cuyo art. 12 establece una exención a favor de las obras e instalaciones de generación, transformación y transmisión de la energía eléctrica, para que no puedan ser gravados mediante tributos locales que restrinjan o dificulten su libre producción y circulación;

iii) el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, por el cual la Nación y las Provincias derogaron los impuestos provinciales específicos que graven la energía eléctrica; y

iv) las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones y el contrato COM, en el que se reitera la comentada exención del art. 12 y se incluye, entre los tributos que no pueden incidir en la obra, el impuesto sobre los ingresos brutos.

Pide que se cite al Estado Nacional (Ministerio de Energía y Minería) como tercero interesado (arts. 94 y ss. del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación), por haber sido quien reguló el pliego de bases y condiciones y el contrato COM y por ser la autoridad de aplicación.

Finalmente, solicita el dictado de una medida cautelar -hasta tanto se dicte sentencia definitiva en los presentes obrados-, por medio de la cual se le ordene a la demandada (tanto respecto de la empresa como de quienes resulten responsables solidarios) que se abstenga de: i) reclamar administrativa o judicialmente el impuesto sobre los ingresos brutos provenientes de las liquidaciones 19170 y 9526565, en los

Procuración General de la Nación

conceptos de capital, intereses y multa; ii) exigir el impuesto sobre los ingresos brutos respecto de ingresos provenientes del contrato COM que acompaña en el anexo II de la demanda; iii) incluir a la actora en todo tipo de listado de deudores morosos y, en el caso de haberla incluido, que la excluya inmediatamente; iv) denegar certificados de cumplimiento o de contratación con fundamento en los actos que se impugnan en la demanda; y v) incluir a la empresa en padrones de riesgo fiscal o similares, vinculados con la retención o percepción del impuesto, con fundamento en la pretensión tributaria impugnada.

A fs. 107, se corre vista, por la competencia, a este Ministerio Público.

-II-

Ante todo, corresponde señalar que, a los fines de dilucidar cuestiones de competencia, ha de estarse, en primer lugar, a los hechos que se relatan en el escrito de demanda y después, y sólo en la medida en que se adecue a ellos, al derecho que se invoca como fundamento de la pretensión, así como también a la naturaleza jurídica de la relación existente entre las partes (Fallos: 328:73; 329:5514 y 340:8).

Desde mi punto de vista, más allá de que la acción declarativa de certeza que inició la actora tenga su origen en actos de naturaleza local, lo medular de la cuestión planteada se encuentra dirigido a determinar si la pretensión de la Provincia de Catamarca de gravar el contrato COM y la actividad comercial que desarrolla la actora en el marco de dicho convenio con el impuesto sobre los ingresos brutos viola lo establecido en el régimen federal regulatorio de la energía eléctrica y si ello constituye un avance de la provincia sobre las facultades delegadas al Gobierno Nacional.

En este sentido, el núcleo del planteamiento que se efectúa en autos remite necesariamente a desentrañar el sentido y los alcances del art. 75, incs. 13 y 18, de la Constitución Nacional, así como de las disposiciones que integran el marco regulatorio eléctrico, que revisten inequívoco carácter federal -leyes 15.336 Y 24.065-, cuya adecuada hermenéutica resultará esencial para la solución del caso y permitirá apreciar si existe la violación constitucional que se alega (Fallos: 311:2154, cons. 4º, 322:2624; 327:1211; 330:542, y C.349, L.XLIV, "*Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. c/ Chubut, Provincia del s/ medida cautelar*", sentencia del 7 de diciembre de 2010, entre otros), por lo que cabe asignar manifiesto contenido de igual naturaleza a la materia del pleito.

Tal circunstancia, según mi opinión, implica que la causa se encuentra entre las especialmente regidas por la Constitución Nacional, a las que alude el art. 2º, inc. 1º, de la ley 48, ya que versa sobre la preservación de las órbitas de competencia entre las jurisdicciones locales y el Gobierno Federal que determina nuestra Ley Fundamental, lo que torna competente a la justicia nacional para entender en ella (Fallos: 314:508; 315:1479; 322:2624, entre muchos otros).

Finalmente, corresponde puntualizar que la invocación del Pacto federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento que en su escrito de inicio efectúa la actora en nada modifica lo hasta aquí expuesto, ya que ella solo se refiere al apartado 2, del art. 1º de dicho instrumento, norma a la que V.E. le ha atribuido carácter federal en razón de la materia que regula: la energía eléctrica (confr. doctrina de Fallos: 322:1781 y 2624; 325:723).

TRANSPORTE PATAGONICA S.A. C/ CATAMARCA, PROVINCIA DE s/ acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad.

CSJ 1356/2018.

(JUICIOS ORIGINARIOS)

Procuración General de la Nación

-III-

Por todo ello y, de conformidad con lo resuelto por V.E., en las causas: C.253. L.XLIX., "Central Puerto S.A. c/ Buenos Aires, Provincia de s/ medida cautelar", sentencia del 28 de noviembre de 2013; I.2, L.L. "Integración Eléctrica Sur Argentina S.A. c/ Buenos Aires, provincia de y otros s/ acción declarativa de certeza", sentencia del 4 de noviembre de 2014; CSJ 1001/2016/1 "Central Puerto S.A. c/ Mendoza, provincia de s/ acción declarativa de certeza (incidente de medida cautelar)" sentencia del 5 de diciembre de 2017; y más recientemente, en CSJ 1374/2016 "Central Puerto S.A. c/ Río Negro, Provincia de y otro s/ acción declarativa de certeza (incidente de medida cautelar)", sentencia del 21 de junio de 2018, sustancialmente análogas a la presente -en las que compartió el criterio sustentado por este Ministerio Público en sus dictámenes del 17 de abril de 2013, del 23 de abril de 2014, del 6 de septiembre de 2016 y del 23 de septiembre de 2016, respectivamente-, opino que, al ser parte una provincia en una causa de manifiesto contenido federal -cualquiera sea la vecindad o nacionalidad de la actora (Fallos: 317:473; 318:30 y sus citas y 323:1716, entre otros)-, el proceso corresponde a la competencia originaria de la Corte.

Buenos Aires, *27* de septiembre de 2018.

ES COPIA

LAURA M. MONTI


ADRIANA MARCHESI
Subsecretaría Administrativa
Procuración General de la Nación

Corte Suprema de Justicia de la Nación

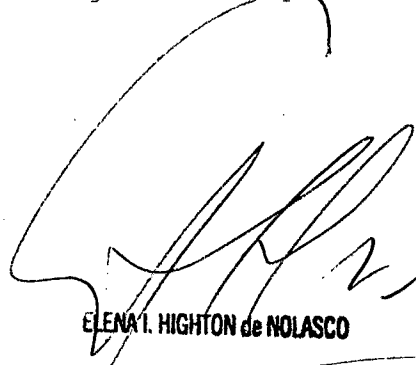
Buenos Aires, 12 de marzo de 2019.-

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Transnea SA c/ CABA s/ proceso de conocimiento", para decidir sobre su procedencia.

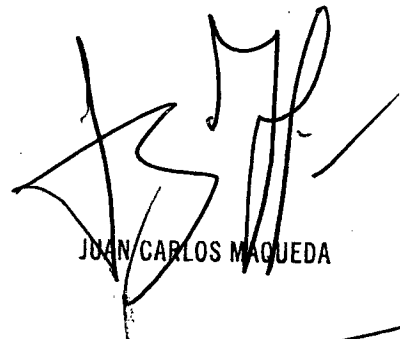
Considerando:

Que las cuestiones planteadas en los presentes autos resultan sustancialmente análogas a las tratadas y resueltas en la causa CSJ 668/2004 (40-T)/CS1 "Transnea S.A. c/ Chaco, Provincia del s/ acción declarativa de inconstitucionalidad", sentencia del 20 de octubre de 2009, a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitirse, en lo pertinente, por razones de brevedad.

Por ello, de conformidad con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se hace lugar a la queja, se declara formalmente procedente el recurso extraordinario, y se revoca la sentencia apelada. Con costas. Agréguese la queja al principal y reintégrese el depósito de fs. 60. Notifíquese y devuélvase.



ELENA I. HIGHTON de NOLASCO



JUAN CARLOS MAQUEDA



RICARDO LUIS LORENZETTI



DISC-11-
disidencia
HORACIO ROSATTI



-//-DENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON HORACIO ROSATTI

Considerando:

1º) Que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revocó la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, rechazó la demanda entablada por la empresa Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino (Transnea SA) contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de obtener la nulidad de los actos administrativos que la intimaron al pago del impuesto sobre los ingresos brutos por los periodos fiscales 12/99 a 2/06.

Para así decidir, consideró que la actora asumió el pago de todos los tributos nacionales, provinciales o municipales en el contrato de concesión suscripto con el Estado Nacional para prestar el servicio público de transporte de energía eléctrica en las provincias de Corrientes, Chaco, Entre Ríos y Formosa. Sobre esa base, resolvió que no le resultaba aplicable la jurisprudencia sentada por este Tribunal en los precedentes "Compañía de Transportes de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. c/ Neuquén, Provincia del" (Fallos: 325:723), "Yacylec S.A. c/ Corrientes, Provincia de" (Fallos: 329:358), y "Transnea SA c/ Chaco, Provincia del" (Fallos: 329:4176), en los cuales se convalidó la exención prevista en el art. 12 de la ley 15.336 con relación al impuesto provincial a los ingresos brutos.

2º) Que contra esa sentencia, a fs. 607/624 vta. interpuso recurso extraordinario Transnea S.A., cuya denegación motivó la interposición de la presente queja.

Sostiene que la actividad de transporte de energía fue declarada de interés nacional por el decreto 1192/1992 y comprendida en el art. 12 de la ley 15.336, norma que prevé una exención para las obras e instalaciones de generación, transformación y transmisión de la energía eléctrica de jurisdicción nacional.

Señala que es concesionaria de un servicio público de jurisdicción federal cuyo marco regulatorio no incluyó el impuesto a los ingresos brutos como un costo del servicio. Invoca el art. 40 de la ley 24.065, en cuanto impone la obligación de incluir dentro de la tarifa a los impuestos y señala, citando jurisprudencia de este Tribunal, que la pretensión del fisco local implicaría un aumento en los valores del servicio prestado, lo cual derivaría en una obstaculización a los fines de utilidad nacional que lo inspiran.

Funda su pretensión en el Pliego de Bases y Condiciones cuyo objeto fue la venta del paquete accionario mayoritario de Transnea S.A. y considera que se trata de un instrumento de jerarquía superior al contrato de concesión. Sostiene que el numeral XV de ese documento no tuvo en cuenta la aplicación del impuesto a los ingresos brutos y que se procuró evitar que esos tributos incidan negativamente en el cumplimiento de la concesión otorgada. Entiende que ese pliego excluye expresamente cualquier tratamiento fiscal



discriminatorio, situación que se generaría si se la obligase a abonar el tributo en cuestión frente al resto de las concesionarias que han obtenido pronunciamientos favorables de este Tribunal.

3°) Que el recurso extraordinario es formalmente admisible, toda vez que se encuentran en tela de juicio los arts. 75, incs. 13, 18 y 30 de la Constitución Nacional y el art. 12 de la ley 15.336 y la decisión definitiva del superior tribunal de la causa ha sido contraria al derecho que el apelante funda en ellas.

4°) Que la cuestión federal a dirimir consiste en determinar si la pretensión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de cobrar el impuesto a los ingresos brutos a la actora, concesionaria del servicio público de transporte de energía eléctrica, resulta contraria al régimen federal de la actividad y, en particular, al art. 12 de la ley 15.336.

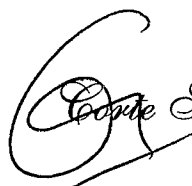
5°) Que las provincias se han reservado la potestad de darse leyes sobre impuestos en los términos del art. 75 incs. 1, 2 y concordantes de la Constitución Nacional y, en general, dictar las normas que juzguen conducentes a su bienestar y prosperidad, sin más limitaciones que las enumeradas en el art. 126 de la Constitución Nacional. La creación de impuestos, elección de objetos imponibles y formalidades de percepción es de su propio resorte y entre los derechos que hacen a su autonomía es primordial el de imponer contribuciones y percibir las sin intervención de autoridad extraña. Es por ello que los actos de las legislaturas provinciales no pueden ser

invalidados sino en los casos en que la Constitución concede al Congreso Nacional, en *términos expresos*, un poder exclusivo, o en que el ejercicio de idénticos poderes ha sido *expresamente prohibido* a las provincias, o cuando hay una absoluta y directa incompatibilidad en el ejercicio de ellos por estas últimas (Fallos: 3:131; 7:373; 51:349; 105:273; 114:282; 137:212; 150:419; 174:358; 235:571; 243:98; 302:1181; 320:619; 331:1412, entre otros).

Estos principios, en lo que refiere al tributo cuestionado en este caso, resultan plenamente aplicables a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de las competencias asumidas como consecuencia del reconocimiento del rango de "ciudad constitucional federada" proveniente de la reforma de la Ley Fundamental de 1994.

6°) Que "una consecuencia inevitable del poder de gravar es la potestad de desgravar, de eximir de la carga tributaria" (Giuliani Fonrouge, Carlos M., *Derecho Financiero*, t. I, 9ª Ed., La Ley, Buenos Aires, 2004, p. 279). En efecto, "si existe una teoría jurídica del tributo, también debe existir una teoría jurídica de la exención. Se trata, en rigor, de la misma teoría vista del envés" (Sainz de Bujanda, Fernando, *Teoría jurídica de la exención tributaria*, en *Hacienda y Derecho*, t. III, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1963, p. 394).

La distribución federal de competencias para crear hechos imponibles lleva consigo inescindiblemente el poder de eximir el pago de los tributos consecuentes, y "(s)i la

 *Corte Suprema de Justicia de la Nación*


Constitución señala, por ejemplo, un ámbito dentro del cual los Estados miembros pueden ejercitar facultades impositivas propias, esto es, reconocidas por normas emanadas del poder constituyente, es claro que otras normas, emanadas de la Federación y formalizadas en leyes ordinarias, no podrán válidamente conceder exenciones de los impuestos que los Estados miembros hayan establecido, salvo que así lo autorice expresamente la Constitución" (Sainz de Bujanda, op. cit., p. 401; y en sentido análogo, Giuliani Fonrouge, Carlos M., *Facultad de las comunas de aplicar gravámenes a las empresas ferroviarias*, Antología Jurídica, Imprenta de la Universidad, Buenos Aires, 1939 y *Delegación de facultades y exención de impuestos provinciales por el Congreso de la Nación*, Estudios del Centro de Investigación Permanente de Derecho Financiero, año IV, N° 3-4, Buenos Aires, 1941, p. 315).

7°) Que dado ese principio general, frente a las exenciones previstas en normas nacionales sobre tributos locales, cobra relevancia el criterio de interpretación restrictivo de estos privilegios. La exención, como principio, no ha de entenderse como indiscriminada y absoluta, sino excepcional (Fallos: 248:736; 249:292; 250:666). Y, en su mérito, debe ser juzgada atendiendo a las circunstancias de especie, a la naturaleza de la actividad desarrollada por la institución que la invoca y a la índole del tributo exigido, so pena de coartar de otro modo las facultades impositivas de las provincias, que estas deben ejercer en su ámbito propio, en tanto no hayan sido delegadas al Gobierno Federal (Fallos: 279:76; 282:407; 302:1425).

8°) Que lo dicho no supone negar las competencias federales que la cláusula del comercio (art. 75, inc. 13 de la Constitución) y la cláusula del progreso (art. 75, inc. 18) atribuyen al Congreso de la Nación, reconocidas pacíficamente por esta Corte (conf. Fallos: 295:338; 305:1847; 320:1302; 322:2598, 2624; 323:3949; 325:723, 1370; 330:5257; 333:1224), sino interpretar tales delegaciones efectuadas por las provincias en línea con la directriz trazada por el art. 75, inc. 30 luego de la reforma de 1994.

Esta cláusula ha reconocido expresamente que *"Las autoridades provinciales y municipales conservarán los poderes de policía e imposición sobre estos establecimientos de [utilidad nacional] en tanto no interfieran el cumplimiento de aquellos fines"*, esto es, los fines específicos de utilidad nacional.

A la luz de esa máxima, el impuesto a los ingresos brutos no resulta, necesariamente, un obstáculo a las actividades de jurisdicción nacional en tanto sea periférico o extrínseco respecto a la utilidad pública del establecimiento nacional, *sin que condicione, menoscabe o impida las operaciones nacionales* (Fallos: 302:1236, disidencia del juez Frías). En efecto, el criterio para aceptar o excluir el ejercicio de poderes provinciales en lugares sometidos a la jurisdicción federal por interés nacional, es precisamente el de la compatibilidad con dicho interés. Como el ejercicio de una facultad por la provincia en los enclaves de jurisdicción federal incide siempre en estos, la pauta no es la incidencia sino su compatibilidad con lo inherente a esa utilidad nacional

 *Corte Suprema de Justicia de la Nación*

(Fallos: 301:1122, voto del juez Frías; 308:647; 311:75,123; 312:1870).

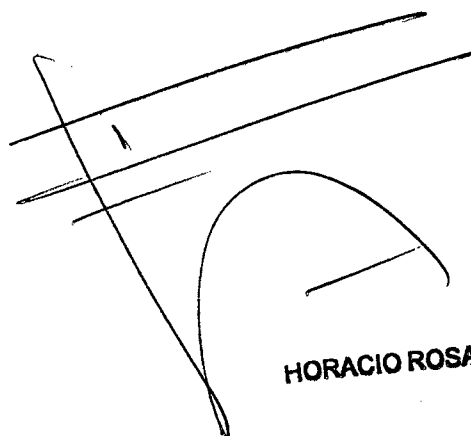
Concretamente, siguiendo estos lineamientos se ha señalado que el art. 12 de la ley 15.336 aquí invocado no consagró una inmunidad impositiva absoluta, en la medida que prescribe que *"Las obras e instalaciones de generación, transformación y transmisión de la energía eléctrica de jurisdicción nacional y la energía generada o transportada en las mismas no pueden ser gravadas con impuestos y contribuciones, o sujetas a medidas de legislación local que restrinjan o dificulten su libre producción y circulación"* (Fallos: 325:723; 322:2598, cit.).

Con base en ese parámetro, la incidencia del tributo pretendido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre los costos del servicio de transporte de energía eléctrica no alcanza, por sí misma, para demostrar un condicionamiento, menoscabo o restricción al transporte que lo torne incompatible con los fines de utilidad nacional fundantes de la jurisdicción federal. Ello así, toda vez que la propia empresa concesionaria ha asumido de forma expresa que *"estará sujeta al pago de todos los tributos establecidos por las leyes nacionales, provinciales o municipales, y no gozará de ninguna excepción que le garantice exenciones ni estabilidad tributaria de impuestos, tasas derechos o contribuciones. Sin perjuicio de ello, si con posterioridad a la fecha DE ENTRADA EN VIGENCIA, se produjera un incremento de su carga fiscal, originada como consecuencia de la sanción de impuestos, tasas o gravámenes nacionales específicos y exclusivos de la actividad de prestación del SERVICIO PÚBLICO"*

DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL o de la aplicación de un régimen tributario diferencial respecto de otros servicios públicos, *LA TRANSPORTISTA podrá solicitar al ENTE las medidas que considere necesarias a fin de restablecer la equivalencia de las prestaciones*" (cfr. art. 27, del Contrato de Concesión suscripto el día 15 de noviembre de 1994 con el Estado Nacional, aprobado por la resolución S.E. 9/94, a fs. 65 del expediente administrativo adjunto).

Dicha disposición pone de manifiesto que el abono de los tributos provinciales fue un costo asumido dentro del servicio concesionado y, frente ello, la invocación genérica de la exención prevista en el art. 12 de la ley 15.336 o de las cláusulas del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento -sobre el cual no se han planteado agravios con fundamentación autónoma en el remedio federal- resultan, en el caso, insustanciales.

Por ello, oída la señora Procuradora Fiscal, se hace lugar a la queja, se declara formalmente procedente el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada. Costas por su orden, en atención a las particularidades de la cuestión debatida. Agréguese la queja al principal y reintégrese el depósito de fs. 60. Notifíquese y devuélvase.



HORACIO ROSATTI

Corte Suprema de Justicia de la Nación

Recurso de queja interpuesto por Transnea S.A., representada por el Dr. Fernando Martín Alfredo Buzzo Rozés.

Tribunal de origen: Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal n° 10.

